

CRONICA DEL MES MAYO, 1979

Mayo es el mes en el que se inician las lluvias. En mayo de 1979 no ha llovido, para que el agua no lavara la sangre derramada sobre las calles de San Salvador y sobre los campos del país, y quedara amalgamada con la tierra y el cemento, como testimonio del mes más trágico y sangriento de los últimos 47 años. Se abre con las manifestaciones pacíficas, festivas y valientes de los trabajadores, y se cierra con más de un centenar de cadáveres y con el estado de sitio. Los martes —rara coincidencia— han sido los días cumbres de este mes de lucha.

El 10. de mayo los trabajadores se manifestaron públicamente por las calles de la capital, en forma pacífica. El gobierno supo actuar respetando el derecho de ellos, y retiró de la vista a los Cuerpos de Seguridad. En la tarde se manifestó el Bloque Popular Revolucionario; y en la mañana todos los demás movimientos y agrupaciones, incluidos algunos partidos de oposición. Si este hecho demostró la fuerza que tiene cada uno de los grupos, también demostró la profunda división que los separa, y el debilitamiento que implica en la clase trabajadora frente al monolitismo de la clase dominante.

A lo largo de todo el mes de mayo se han realizado también otras manifestaciones pacíficas y disciplinadas, aunque combativas. Los entierros de las víctimas de masacres de los martes, se convirtieron en manifestaciones multitudinarias de dolor y protesta. Las pequeñas manifestaciones de apoyo a los ocupantes de iglesias y embajadas se convirtieron en carne de cañón del nerviosismo de los cuerpos de seguridad o de la orden de reprimir a sangre y fuego que diera algún oficial subalterno. Una espiral creciente de muerte y violencia se ha desatado en el mes de mayo. Cada acción provocaba una reacción, y ésta la siguiente, en una guerra incontenible.

Hay que retroceder a los últimos días del mes anterior, para poder entender la tragedia de mayo. Cinco altos dirigentes del BPR fueron capturados en las postrimerías de abril, y aunque dos de ellos fueron puestos en libertad en la primera quincena de mayo, los otros tres son negados por los Cuerpos de Seguridad. La manifestación del BPR en el 10. de

mayo no sólo reivindicaba los derechos de los trabajadores, sino que también exigía la libertad de sus dirigentes.

Pocos días después, elementos del BPR se toman las embajadas de Francia y Costa Rica, y la Catedral de San Salvador, para presionar nacional e internacionalmente en favor de sus demandas de libertad a los detenidos. Se siguieron tomas de otras iglesias por varios puntos de la República, y de la embajada de Venezuela. Los rehenes de Costa Rica fueron liberados por enviados de aquel país, aprovechando el escaso número e inexperiencia de los ocupantes, que días después salían asilados. Los rehenes de Venezuela se escaparían días más tarde, en unas condiciones que no han quedado muy claras, dejando dentro a los ocupantes, rodeados, y sin alimentos, luz ni agua. En la embajada de Francia, en cambio, la situación se ha manejado con más inteligencia. El último día del mes de mayo el BPR aceptó el asilo político ofrecido por Panamá, y el desalojar ambas embajadas ocupadas. Al finalizar el mes también fueron desocupadas las iglesias, aunque alguna ha vuelto a ser tomada por el FAPU. Sólo una iglesia, en un pueblo de Chalatenango, San José Las Flores, fue desalojada por la fuerza pública, con un saldo de dos muertos y 8 capturados.

En apoyo a las demandas del BPR, y en represalia por las masacres que se van cometiendo, por todo el territorio nacional se desata una ola de acciones acompañadas: barricadas en calles y carreteras, quema de buses urbanos e interurbanos, tomas de locales, paros de fábricas y empresas, mítines y manifestaciones. El comercio cierra, sobre todo en el centro de la capital, donde son más intensas las acciones. Los buses se retiran de la circulación, o en horas de la tarde, o en días enteros, la gente no puede movilizarse fácilmente, la vida se paraliza parcialmente, el temor invade a muchos.

Las FPL entran en la lucha, tomando venganza de las muertes que van produciéndose, y teniendo como blanco a personas vinculadas de alguna manera con el poder y con los cuerpos represivos: policías y guardias, un ministro, dirigentes de ORDEN,

jefes y empleados locales de ANTEL, comandantes o alcaldes; detonan bombas en puestos de guardias, alcaldías o edificios oficiales. Los otros grupos armados de izquierda también participan, aunque muy rara vez, en las venganzas. Por su parte, los cuerpos de seguridad, tal vez por venganza, se ceban en manifestantes pacíficos del BPR, identificándolos equivocada e injustamente con los grupos armados.

El martes, 8 de mayo, una pequeña manifestación pacífica se sienta en la calle, delante de la catedral ocupada por el BPR. De repente una lluvia de disparos de la Policía Nacional los pone en desbandada, y en las gradas de la catedral van cayendo los cuerpos de los jóvenes, muchos de ellos heridos por la espalda. El cerco militar no permitió ni a la Cruz Roja ni a otras asistencias médicas acercarse al sitio de los acontecimientos. Como consecuencia, algunos heridos murieron desangrados por falta de cuidados. El resultado fue de 25 muertos y unos 70 heridos. Los reporteros internacionales venidos por la toma de embajadas, pudieron fotografiar los hechos, filmarlos y narrarlos. La TV y los medios de comunicación divulgaron por todo el mundo las pruebas objetivas y fehacientes de la masacre.

El siguiente martes, 15 de mayo, fueron impedidas manifestaciones en la capital o en sus cercanías. En Soyapango, donde habían aparecido dos cadáveres uno del FAPU y otro del BPR, una manifestación del primer grupo fue disuelta por la fuerza, y se tuvieron que refugiar en la iglesia. En la represión murió una persona. Hubo heridos y detenidos. Por la noche hubo un tiroteo prolongado ante la embajada de Sud-Africa, donde las FPL mataron a tres policías de hacienda.

El martes, 22, una manifestación trata de llegar a la embajada de Venezuela para llevar agua y alimentos a los del BPR que la tenían tomada, y al no detenerse ante el cerco militar, es disuelta a tiros: 14 muertos y muchos heridos fue el saldo, además de capturados y un elevado número de desaparecidos que puede elevar la cifra de muertos.

Entre estos martes sangrientos hubo represiones aisladas, con muertes de jóvenes que ponían mantas, hacían pintadas, quemaban buses, ponían barricadas o detonaban bombas, tanto en la capital como en algunos puntos del interior.

Por su parte, los grupos militares, y sobre todo las FPL asesinaron policías y guardias, representantes del poder establecido, marinos, y símbolos o instrumentos de la represión en el interior.

Parecería que se había desatado una guerra desigual, en la que las FPL mataban a miembros vinculados con el gobierno, tal vez en venganza por la represión a las organizaciones populares, y las fuerzas de seguridad mataban a los manifestantes pacíficos de dichas organizaciones, e incitaban a la venganza de los grupos político-militares, y así continuaba la lucha contra el pueblo pacífico, pero orga-

nizado y combatiente.

La víspera del último acto masivo de represión, el 21 de mayo, el Presidente de la República se dirigió a la nación por todos los medios de comunicación, y en un tono moderado analizó los hechos e implícitamente reconoció que el problema sobrepasaba la capacidad de solución para el gobierno. Prometió elecciones libres y cambios en la ley electoral. Pidió a todas las fuerzas legalizadas del país que se unieran para salir del impase, y asistieran a un Foro Nacional para encontrar las soluciones que salvaran al país del desastre.

Pero la matanza del 22 de mayo, poco después del discurso del Presidente, hicieron dudar de la sinceridad del llamado, o de la solidez y disciplina del grupo dominante y represivo. Varias voces se habían levantado antes, pidiendo la reflexión y el alto a la barbarie, desde las universidades, desde la iglesia, desde los partidos políticos de oposición, y desde otras organizaciones. El asesinato del Ministro de Educación y del chofer que lo conducía, en la mañana del 23 de mayo, cerró el paso a la etapa anterior y a las posibilidades de un diálogo amplio. Una prolongada reunión del Gabinete concluyó con la implantación del estado de sitio aprobado por la Asamblea Legislativa.

El estado de sitio no ha sido simplemente una medida de emergencia para una situación convulsiónada. Ha sido el triunfo de las fuerzas de derechas sobre la línea del Presidente, quien se ha resistido varias veces a aceptar las presiones que se lo exigían. Ese triunfo ha exaltado a las derechas, que se disponen a implantar un régimen de terror. Ha significado de hecho el abrir la puerta a los grupos extremistas y al terrorismo de derechas, que en las tres primeras semanas del mes se mantuvieron a la expectativa, sin intervenir ni pronunciarse. Con la implantación del estado de sitio sin embargo, se ha desatado toda una campaña de terrorismo de derechas. Por todo el país van siendo asesinados, o apareciendo sus cadáveres rematados y desfigurados, dirigentes de izquierda, del BPR, y principalmente de ANDES. En los medios impresos y publicitarios se han vuelto a volcar las plumas de los escritores a sueldo de las derechas. Hay una lluvia de asociaciones fantasmas, surgidas de las cenizas, que acusan a personas e instituciones, y las calumnias como culpables, para justificar futuros ajusticiamientos o asesinatos. La censura permitida por el estado de sitio no interviene contra estos que agudizan el odio y la lucha de clases. Se amenaza, incluso, con establecer tribunales militares contra la "subversión", lo que no está contemplado en las garantías constitucionales suspendidas. El estado de sitio servirá para reprimir los movimientos de izquierda, y para desatar los instintos de las derechas.

La invitación del Presidente Romero al diálogo, está fracasando. Su línea de entendimiento pacífico ha sido derrotada. Tras la matanza del 22, y en

estado de sitio, el Foro Nacional no tiene sentido. No se puede negociar con un perdedor. No hay libertad para disentir, para reunirse, para discutir. No hay ambiente de diálogo. El Foro Nacional ha abortado. Así se explica la ausencia de la mayor parte de las instancias y fuerzas políticas y sociales.

Pero el estado de sitio no ha logrado detener totalmente la ola de violencia. Al salir de su oficina céntrica, el Lic. Montoya, Contador Público Certificado, murió perforado por las balas de unos desconocidos. El hombre de negocios Miguel Armando Miguel fue secuestrado, y nadie aún ha reclamado rescate. El Encargado de Negocios de Suiza fue asesinado, y a priori se le ha atribuido su muerte a las izquierdas, aunque ningún grupo se lo ha adjudicado.

La conflictividad violenta del mes de mayo ha opacado todos los otros aspectos de la vida nacional. Incluso la huelga de la construcción, solucionada

por un laudo arbitral, ha tenido poca resonancia. En el mundo de la economía, aparte de la recesión originada por los acontecimientos, casi ha pasado desapercibido incluso el que el BIRF y el BID hayan concedido créditos por valor de 124 millones para apuntalar el sistema y la economía nacional. Los regresados de Arabia Saudita parece que serán indemnizados por la empresa contratadora. Y como si todo estuviera normal, se ha montado una gran campaña acerca de la repoblación forestal.

Solamente las luchas en Nicaragua, donde Somoza, afianzado por el préstamo "Técnico" de más de 60 millones de dólares del Banco Mundial, nuevamente está matando a la juventud nicaragüense levantada en armas, han podido distraer un poco la atención puesta en El Salvador durante el mes de mayo, tanto por los salvadoreños como por todo el mundo.

Eugenio C. Anaya, h.

